

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

INE/JGE223/2023

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/RI/SPEN/50/2023, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, EMITIDA POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2023

VISTOS los autos para resolver el Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/50/2023, promovido por Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, para controvertir la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, de fecha 13 de junio de 2023.

GLOSARIO

Autoridad instructora/Dirección Jurídica	Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
Autoridad resolutora	Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Catálogo	Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Conducta atribuida	No desempeñar funciones inherentes al puesto con la diligencia, cuidado y esmero apropiado, en virtud de que no llevó a cabo las acciones administrativas correspondientes inherentes al cargo, relativas a la recepción, control, registro, administración y supervisión, de vales de gasolina y/o combustible que en su conjunto amparan la cantidad de \$196,659.00 (Ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
Coordinador administrativo	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Entonces auxiliar distrital	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.
Estatuto	Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral.
INE/Instituto	Instituto Nacional Electoral.
Infractor 1	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.
Infractor 2	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.
JDE	07 Junta Distrital Ejecutiva en Chiapas.
JGE	Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
JLE	Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas.
LGIPE/Ley	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lineamientos	Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad.
Recurrente/Inconforme	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.
Testigo 1	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.
Testigo 2	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.
Testigo 3	Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales.

ANTECEDENTES

I. Denuncia.

El 29 de junio de 2022, se recibió en la Dirección Jurídica, vía correo electrónico, el oficio INE/JLE/CA/0397/2022, fechado el 28 de junio del mismo año, por el que el Coordinador Administrativo de la JDE hizo del conocimiento

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

de la propia autoridad instructora, la conducta atribuida a la hoy recurrente y otras personas, misma que se describe en glosario de la presente resolución.

II. Radicación.

El 15 de agosto de 2022, la autoridad instructora dictó auto de admisión, registrándose bajo el expediente INE/DJ/HASL/107/2022, asimismo, remitió la denuncia al área de investigación, a fin de realizar las investigaciones que considerara pertinentes.

III. Diligencias de investigación.

Requerimiento de informes.

- a. Mediante oficio INE/DJ/11012/2022, de fecha 5 de septiembre de 2022, la autoridad instructora requirió al infractor 2 que informara y, en su caso, remitiera el soporte documental respecto de la terminación laboral con el entonces auxiliar distrital, los motivos o circunstancias de la baja, así como proporcionar acta entrega-recepción.

En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito de 7 de septiembre de 2022, el infractor 2 refirió que no obraba acta entrega-recepción, manifestando que por normativa no estaba obligado, y remitió el soporte documental de la baja solicitada.

- b. Mediante oficio INE/DJ/14654/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, la autoridad instructora requirió a la recurrente para que informara y aportara el soporte documental relativo al jefe inmediato del entonces auxiliar distrital, así como de las actividades y funciones desempeñadas por dicha persona; información del personal que desde el 2019 llevó a cabo la supervisión, así como la gestión, control y administración del Sistema de Vehículos; personal que durante los Procesos Electorales de los ejercicios 2021 y 2022 estuvo supervisando y a cargo del registro y comprobación documental de los recursos presupuestales registrados en el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos "SICOPAC", o algún otro sistema electrónico, así como en lo referente a la dotación y/o ministración de combustible y/o vales de gasolina, del Sistema de Vehículos.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

El requerimiento fue atendido mediante oficio INE/JD7-CHIS/VS/405/2022 del 24 de noviembre de 2022, en donde la recurrente proporcionó diversa información y documentación.

- c. A través del oficio INE/DJ/15441/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022, se requirió al entonces auxiliar distrital para que informara y aportara el soporte documental relativo a quién era su jefe inmediato, así como información relacionada con las actividades encomendadas de julio de 2019 a enero de 2022, relacionadas con la gestión, administración, resguardo, control o alguna relacionada con la dotación y/o ministración de combustible y/o vales de gasolina, de igual manera actividades durante los Procesos Electorales de los ejercicios 2021 y 2022 relacionadas con el registro y comprobación documental de los recursos presupuestales registrados en el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC” y su supervisión.

No obstante, no se recibió respuesta a dicho requerimiento.

- d. Mediante oficio INE/DJ/15578/2022 de fecha 9 de diciembre de 2022, se requirió al infractor 1 para que informara y aportara la documentación relacionada con el jefe inmediato del entonces auxiliar distrital, así como de las actividades y funciones desempeñadas por dicha persona, información del personal que desde el año 2019 llevó a cabo la supervisión, así como la gestión, control y administración del Sistema de Vehículos, personal que durante los Proceso Electorales de 2021 y 2022 estuvo supervisando y a cargo del registro y comprobación documental de los recursos presupuestales relacionados con el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC”, o en algún otro sistema electrónico, así como en lo referente a la dotación y/o ministración de combustible y/o vales de gasolina, del Sistema de Vehículos.

En atención a lo anterior, mediante oficio INE/07JDE/VE/333/2022, de fecha 13 de diciembre de 2022, el infractor 1 proporcionó diversa información y documentación al respecto.

IV. Inicio del Procedimiento Laboral Sancionador.

El 15 de diciembre de 2022, la autoridad instructora dictó el auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022 en contra de

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

la hoy recurrente, así como de los infractores 1 y 2, atribuyéndoles la conducta referida en el glosario. El 16 de diciembre siguiente fue notificada la determinación a las personas señaladas.

V. Contestación.

Mediante oficio INE/07/JDE/VS/022/2023, de fecha 13 de enero de 2023, presentado en esa misma fecha en la JLE, la promovente remitió escrito de contestación y ofreció las pruebas que estimó pertinentes a la autoridad instructora.

VI. Auto de admisión de pruebas.

El 26 de enero de 2023, la autoridad instructora dictó el auto de admisión de pruebas, en el cual admitió las pruebas de cargo y descargo y tuvo por desahogadas aquéllas que por su propia y especial naturaleza así lo permitieron.

Asimismo, la Dirección Jurídica señaló el día 15 de febrero de 2023, para llevar a cabo el desahogo a distancia de las pruebas testimoniales a cargo de los testigos 1, 2 y 3, ofrecidas por los infractores 1 y 2.

El 3 de febrero de 2023, la autoridad instructora notificó a la recurrente, así como a los infractores 1 y 2 el auto aludido.

VII. Alegatos.

El 29 de marzo de 2023, la autoridad instructora dictó el auto mediante el cual concedió a la recurrente y a los infractores 1 y 2 un plazo de 5 días para formular alegatos, el cual le fue notificado el 30 de marzo siguiente.

Los días 4 y 5 de abril de 2023, la autoridad instructora recibió los escritos de alegatos de la recurrente y los infractores 1 y 2.

VIII. Cierre de instrucción.

El 24 de abril de 2023, al no haber diligencias o pruebas pendientes de desahogo, la autoridad instructora dictó el cierre de instrucción del Procedimiento Laboral Sancionador, para resolver conforme a Derecho corresponda, mismo que fue notificado a las partes el 26 de abril de 2023.

IX. Resolución del Procedimiento Laboral Sancionador.

El 13 de junio de 2023, la autoridad resolutora dictó la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, en la que se determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

“[...] RESUELVE

PRIMERO. Ha quedado acreditada la infracción al artículo 71, fracción XI del Estatuto, por lo que se impone a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, una sanción consistente en amonestación, con respecto a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, una suspensión de 10 días sin goce de sueldo y a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, la sanción consistente en suspensión de 15 días sin goce de sueldo, funcionarios adscritos a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas.”

X. Notificación.

El 16 de agosto de 2023, le fue notificada personalmente la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022 a la recurrente.

XI. Presentación del Recurso de Inconformidad.

El 28 de agosto de 2023, la recurrente presentó el escrito a través del cual interpuso Recurso de Inconformidad, a fin de controvertir la resolución emitida dentro del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, por la cual, la Secretaría Ejecutiva le impuso la sanción de suspensión de 10 días sin goce de sueldo.

XII. Auto de turno.

El 1º de septiembre de 2023, la autoridad instructora designó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores como órgano encargado de sustanciar el recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/50/2023, así como

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

elaborar el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, a efecto de someterlo a consideración de esta JGE.

XIII. Remisión de Expediente.

Mediante oficios número INE/DJ/13119/2023 e INE/DJ/13123/2023, la Dirección Jurídica remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores las constancias que integran el expediente INE/RI/SPEN/50/2023.

XIV. Admisión del recurso y cierre de instrucción.

En su oportunidad, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores determinó la admisión a trámite del recurso de inconformidad presentado por la recurrente.

Asimismo, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 368 del Estatuto, por lo que se puso el expediente en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Competencia.

De conformidad con los artículos 360 y 368 del Estatuto vigente, así como 52, párrafos 1 y 2 de los Lineamientos, esta JGE es el órgano administrativo competente para resolver el Recurso de Inconformidad que se interponga para controvertir, entre otras, las resoluciones emitidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al Procedimiento Laboral Sancionador.

Por lo tanto, con fundamento en esas disposiciones esta JGE es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Inconformidad, al controvertirse la resolución emitida por la Secretaría Ejecutiva en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022.

SEGUNDO. Norma que regula al acto controvertido.

El párrafo tercero del artículo primero de nuestro máximo ordenamiento establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran los principios de debido proceso y de no retroactividad, así como el principio de legalidad, al establecer, el primer precepto, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; así mismo, se prevé que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El segundo precepto constitucional referido señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo; por lo que el principio de legalidad se refiere a que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente.

Además, el artículo 41, párrafo tercero, base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las relaciones de trabajo entre el INE y sus servidores se regirán por la LGIPE y el Estatuto que, con base en ella, apruebe el Consejo General.

Luego entonces, el artículo 72, párrafo 3 de la LGIPE prevé que la o el Vocal Secretario Distrital auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas de la Junta Distrital Ejecutiva.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

El artículo 204 de la LGIPE, indica que en el Estatuto se establecerán, además de las normas para la organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, las relativas a las normas y procedimientos para la determinación de sanciones.

Asimismo, de conformidad con el artículo 205, párrafo 1 de la LGIPE, por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier interés particular.

En el Estatuto se establecen las siguientes disposiciones que resultan relevantes para el presente caso:

- a. De conformidad con las fracciones III y IV del artículo 1 del Estatuto, el referido instrumento tiene por objeto establecer las normas generales para la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Nacional, asimismo, establecer las condiciones generales de trabajo, derechos, obligaciones y prohibiciones del personal del INE, así como el Procedimiento Laboral Sancionador y los medios ordinarios de defensa. La normatividad específica estará contenida en el Manual de Organización General y manuales de organización, de procesos y procedimientos, así como en los lineamientos correspondientes.
- b. El artículo 71, fracción XI del Estatuto indica que es obligación del personal del Instituto, desempeñar sus labores con la diligencia, cuidado y esmeros apropiados, observando las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos.
- c. Asimismo, con base en lo establecido en la fracción XXIII del artículo 71 del Estatuto, es una obligación del personal de Instituto, observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la Ley, del presente Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del Instituto.
- d. Por su parte, el artículo 310 del Estatuto dispone que la facultad para determinar el inicio del procedimiento laboral sancionador caducará en seis meses contados a partir del momento en que la autoridad instructora tenga conocimiento formal de la conducta infractora. La facultad para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las faltas caducará en tres años, contados a partir del inicio del procedimiento, en el caso de faltas graves y muy graves, y un año en el caso de faltas leves.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

- e. De acuerdo con el artículo 311 del Estatuto, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de una conducta o conductas probablemente infractoras deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad instructora, debiendo remitir los elementos de prueba con que cuente.

Asimismo, el órgano u autoridad que reciba una denuncia o algún escrito relacionado con la denuncia de una conducta o varias conductas probablemente infractoras, lo deberá remitir, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, a la autoridad instructora del procedimiento laboral sancionador.

- f. En términos del artículo 319 del Estatuto, el procedimiento laboral sancionador podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. Se inicia de oficio cuando cualquiera de las áreas u órganos del Instituto, hacen del conocimiento de la autoridad instructora las conductas probablemente infractoras, o bien, cuando ésta conoce de los hechos o de las conductas probablemente infractoras.
- g. El artículo 320 del Estatuto señala que la autoridad instructora al conocer de la comisión de una posible conducta infractora, iniciará una investigación preliminar, con el objeto de conocer las circunstancias concretas del asunto y recabar elementos que permitan determinar si ha lugar o no al inicio del Procedimiento Laboral Sancionador.
- h. De conformidad con el artículo 321 del Estatuto, si la autoridad instructora considera que existen elementos de prueba suficientes para acreditar la conducta posiblemente infractora y la probable responsabilidad de quien la cometió, determinará el inicio del procedimiento y su sustanciación. En ningún supuesto, la falta de aportación de las pruebas por parte de alguna persona interesada será motivo para decretar el no inicio del procedimiento. En todo caso, después de realizar la investigación preliminar, la autoridad instructora resolverá lo conducente con los elementos que obren en autos.
- i. El artículo 323 del Estatuto establece que el auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador es la primera actuación con la que comienza formalmente el mismo y su notificación interrumpe la prescripción.
- j. Con base en el artículo 327 del Estatuto, para conocer la verdad sobre los hechos, la autoridad instructora podrá allegarse de cualquier medio de prueba,

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

ya sea que pertenezca a las partes o a terceros y que hubieran sido obtenidas lícitamente y con pleno respeto a los derechos humanos.

- k. El artículo 329 del Estatuto, las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia.
- l. Con fundamento en el artículo 334 del Estatuto, el Procedimiento Laboral Sancionador se divide en dos etapas: instrucción y resolución. La instrucción comprende desde el auto de inicio del procedimiento hasta el auto de cierre. La segunda etapa se conforma por la resolución que emite la autoridad resolutora y, en su caso, la ejecución de la sanción.
- m. El artículo 335 del Estatuto refiere que la autoridad instructora deberá notificar personalmente a las partes el inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, en un plazo de diez días hábiles. Para ello, a la persona denunciada, se le correrá traslado con copia simple de la denuncia y/o el documento en el que consten los hechos materia del procedimiento, el auto de inicio y de la totalidad de las constancias que obren en el expediente, para que prepare su defensa.
- n. En términos del artículo 338 del Estatuto, la autoridad instructora resolverá sobre la admisión o el desechamiento de las pruebas, dentro de los ocho días hábiles siguientes a que concluya el plazo de diez días otorgado por la autoridad para la contestación del emplazamiento. De ser necesario, en el mismo auto se ordenará la preparación de las pruebas que conforme a derecho procedan y así lo requieran, indicando el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas.
- o. El artículo 344 del Estatuto indica que concluida la etapa de alegatos y de no existir pruebas pendientes que desahogar, ni diligencias que ordenar o realizar, la autoridad instructora podrá ordenar, en su caso, que se subsane toda omisión que notare durante la sustanciación del procedimiento, dando vista a las partes a efecto de que dentro de los tres días siguientes a la notificación manifiesten lo que a su derecho convenga.
- p. En relación con los artículos 350 y 355 del Estatuto, el Instituto, previa sustanciación del Procedimiento Laboral Sancionador, podrá aplicar a su personal sanciones de amonestación, suspensión, destitución y sanción pecuniaria, señalando como directrices para su calificación los grados, mínimo, medio y máximo, así como en atención a los elementos siguientes:

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

- I. La gravedad de la falta en que se incurra;
 - II. El nivel jerárquico, grado de responsabilidad, los antecedentes y las condiciones personales y, de ser el caso, las económicas del infractor;
 - III. La intencionalidad con la que realizó la conducta indebida;
 - IV. La reincidencia en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de las obligaciones;
 - V. La reiteración en la comisión de infracciones o en el incumplimiento de las obligaciones;
 - VI. La capacidad económica de la persona infractora o, en su caso, los beneficios económicos obtenidos, así como el daño, perjuicio o el menoscabo causado por la comisión de la conducta infractora;
 - VII. El número de personas afectadas o beneficiadas, en su caso, con la conducta infractora, y
 - VIII. Alguna otra circunstancia de modo, tiempo o lugar que agrave o atenúe la conducta demostrada en el expediente.
- q. Ahora bien, el artículo 357 del Estatuto señala que, el cumplimiento o ejecución de las sanciones que se impongan en la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador deberá sujetarse a lo siguiente:
- 1. La amonestación se ejecutará con la incorporación de una copia de la resolución respectiva, en el expediente de la persona sancionada;
 - 2. La sanción pecuniaria se podrá pagar mediante depósito en la cuenta institucional que al efecto se señale, o bien, a través del descuento de nómina correspondiente;
 - 3. La suspensión deberá cumplirse a partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución, y
 - 4. La destitución surtirá sus efectos sin necesidad de algún acto de aplicación, el día hábil siguiente al en que se produzca la notificación de la resolución.
- r. El artículo 358 del Estatuto indica que el Recurso de Inconformidad es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas.
- s. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 366 del Estatuto, tratándose de resoluciones emitidas en el Procedimiento Laboral Sancionador, sólo se podrán ofrecer y admitir aquellas pruebas que revistan el carácter de supervenientes.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Además, los Lineamientos, establecen lo siguiente:

- a.** El artículo 11 dispone que las notificaciones que se realicen por correo electrónico se entenderán como válidas al momento de recibir el acuse de la misma por parte de la persona destinataria, dentro del día hábil siguiente al en que se le remitió el correo, en el entendido que, de no recibirse la confirmación de entrega, se tendrá por notificado de la determinación de mérito, con la fecha y hora de envío que conste en el sistema de correo.
- b.** El artículo 35 señala que el Procedimiento Laboral Sancionador es aplicable al personal del Instituto que incumpla las obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinja las normas en términos del artículo 307 del Estatuto.
- c.** El artículo 36 establece que las actuaciones previas al Procedimiento Laboral Sancionador se iniciarán, a juicio de la autoridad instructora, cuando tenga conocimiento formal por cualquier medio de una conducta probablemente infractora, con la finalidad de recabar elementos de prueba que permitan determinar, en su caso, su inicio.
- d.** El artículo 44 establece que lo siguiente:
 - 1.** El auto de inicio es la primera actuación con la que formalmente comienza el Procedimiento Laboral Sancionador, el cual se deberá notificar a las partes, en el plazo previsto en el artículo 335 del Estatuto y dentro del plazo de seis meses contados a partir de que la autoridad instructora tuvo conocimiento formal de la posible conducta infractora, con la finalidad de que los trabajadores cuenten con la seguridad jurídica de que, transcurrido el plazo previsto en el Estatuto, no podrán ser sometidos a ningún tipo de procedimiento sancionador y menos aún, a la imposición de una sanción por esa conducta.
 - 2.** Una vez notificado el auto de admisión del inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, la persona probable infractora deberá mantener informada de manera fehaciente a la autoridad instructora de sus ausencias o realización de actividades por motivos de trabajo en lugar distinto al de su adscripción, con la

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

finalidad de establecer las medidas adecuadas que permitan realizar cualquier notificación con motivo del desahogo del procedimiento referido.

3. La persona denunciante en su escrito inicial deberá proporcionar a la autoridad instructora su domicilio, correo electrónico o dirección que permita facilitar cualquier notificación con relación a la queja o denuncia. En caso de no ser cierto o resultar inexacto el domicilio, dirección o correo electrónico, las notificaciones se practicarán por estrados y se entenderán válidamente realizadas para todos los efectos legales el día de su realización, sin necesidad de realizar un acuerdo que autorice su realización.

En el Catálogo se dispone que el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Distritales Ejecutivas tiene relación interna con la o el Vocal Ejecutivo Local y con los Vocales Distritales, entre ellos, con los Vocales Secretarios Distritales.

De igual manera, para el puesto de Vocales Secretarios Distritales, bajo el código SPJDVS0, se establece como cargo inmediato superior a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas, y entre otras, los siguientes objetivos y funciones: auxiliar en la supervisión de la administración de recursos humanos, financieros, y materiales de la Junta Distrital Ejecutiva, validando la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto y su registro en los sistemas informáticos que se determinen para esos efectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia, así como verificar que los arrendamientos, adquisiciones y servicios de la Junta Distrital Ejecutiva cumplan con la normatividad vigente en la materia.

Por otra parte, el artículo 192 del Manual de Normas Administrativas en materia de recursos materiales y de servicios generales del INE, señala que, a los Responsables Administrativos en las Juntas Locales y a los **Vocales Secretarios en las Juntas Distritales**, les corresponde supervisar el correcto uso de los vehículos y promover con toda oportunidad, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; así como el cumplimiento de los programas de verificación vehicular en su caso.

El artículo 208 del Manual aludido, refiere que, tratándose de las Juntas Distritales Ejecutivas, será obligación del resguardante o usuario devolver los vales de gasolina no utilizados, correspondientes a la dotación mensual, mismos que serán

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

entregados a las y los Vocales Secretarios adscritos a las Juntas Distritales Ejecutivas.

En el mismo sentido, el artículo 211 del citado Manual, señala que en el caso de que el Instituto suscriba un contrato de arrendamiento de vehículos, la responsabilidad de la recepción, uso, asignación y control de los vehículos en las Juntas Distritales Ejecutivas estará a cargo de las y los Vocales Secretarios.

Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad instructora deberá garantizar el derecho de audiencia y defensa de la persona probable infractora; para ello, deberá informar a la persona probable infractora de las acusaciones en su contra y le correrá traslado con la totalidad de las pruebas ofrecidas y actuaciones que se hayan realizado hasta el dictado del auto de inicio, para que manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

TERCERO. Requisitos de procedencia. El presente Recurso de Inconformidad reúne los requisitos formales y sustantivos para su procedencia, previstos en los artículos 361 y 365 del Estatuto, en los siguientes términos:

Oportunidad. Se debe tener presente que, de las constancias que obran en autos, se advierte que la resolución del 13 de junio de 2023, dictada en el expediente INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, fue notificada personalmente a la recurrente el 16 de agosto del mismo año.

En ese sentido, el artículo 281, párrafo segundo del Estatuto, señala que las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día que se practiquen.

Por otra parte, el artículo 361 del Estatuto establece que el Recurso de Inconformidad podrá interponerse, dentro de los diez días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se recurra.

En tal virtud, en el caso que nos ocupa, al notificarse la resolución a la recurrente el 16 de agosto de 2023, surtió sus efectos legales el mismo día, de modo que el término para interponer el recurso concluyó el 30 de agosto de 2023.

De esta forma, según el sello de recepción, se advierte que la recurrente interpuso su Recurso de Inconformidad el 28 de agosto de 2023, en consecuencia, se tiene presentado en tiempo.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Forma y legitimación. En el recurso interpuesto se hizo constar el nombre completo de la recurrente, así como su domicilio para oír y recibir notificaciones; se manifiestan los agravios y se asienta la firma autógrafa de la misma.

Asimismo, la recurrente se encuentra legitimada para interponer el Recurso de Inconformidad al tratarse de una de las personas que fueron sancionadas en la resolución que puso fin al Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022.

En este sentido, al no presentarse ningún supuesto señalado en el artículo 364 del Estatuto y contener los elementos señalados en el artículo 365 del ordenamiento referido, se tiene que el escrito cumple con los criterios de procedibilidad.

CUARTO. Determinación recurrida.

Con fecha 13 de junio de 2023, el entonces Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de autoridad resolutora, dictó la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, en cuyo punto Primero se determinó lo siguiente:

“[...] RESUELVE

PRIMERO. Ha quedado acreditada la infracción al artículo 71, fracción XI del Estatuto, por lo que se impone a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, una sanción consistente en amonestación, con respecto a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales y a Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, la sanción consistente en suspensión de 15 días sin goce de sueldo, funcionarios adscritos a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas.”

No es óbice señalar que, partiendo del principio de economía procesal y, en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la resolución en comento, se estima que es innecesario transcribir la totalidad del acto impugnado.

Lo anterior siguiendo el criterio orientador, contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 219558¹, que señala lo siguiente:

¹ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, p. 406, núm. de registro 219558.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

“ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. De igual forma se estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía de agravios por el accionante, sin que sea obstáculo a lo anterior que en considerando subsecuente se realice una síntesis de los mismos.”

QUINTO. Resumen de agravios.

Como se adelantó, el acto que se reclama en el presente asunto lo constituye la resolución recaída en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, en la que se determinó una suspensión de 10 días sin goce de sueldo a la recurrente, al haber quedado acreditada la conducta que le fuera atribuida, consistente en no desempeñar funciones inherentes al puesto con la diligencia, cuidado y esmero apropiado, en virtud de que no llevó a cabo las acciones administrativas correspondientes inherentes al cargo, relativas a la recepción, control, registro, administración y supervisión, de vales de gasolina y/o combustible que en su conjunto amparan la cantidad de \$196,659.00 (Ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Para sustentar la acción impugnativa, la inconforme argumenta, en síntesis, los siguientes agravios:

Primero.

La recurrente señala una interpretación errónea por parte de la responsable a lo dispuesto en el artículo 311 del Estatuto, el cual prevé que el órgano o autoridad que reciba una denuncia o algún escrito relacionado con la denuncia de una conducta o varias conductas probablemente infractoras, lo deberá remitir, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, a la autoridad instructora del Procedimiento Laboral Sancionador.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Lo anterior, debido que, desde su apreciación, el Procedimiento Laboral Sancionador iniciado en su contra no debió instruirse al considerar que precluyó la acción de la autoridad instructora, debido a que mediante oficio de fecha 1° de junio de 2022, los ahora infractores comunicaron al Encargado de la Vocalía Ejecutiva de la JLE de las irregularidades cometidas por el entonces auxiliar administrativo; sin embargo, fue hasta el día 28 de junio del mismo año, cuando a través del oficio INE/JLE/CA/0397/2022, el Coordinador Administrativo hizo del conocimiento de la autoridad instructora las conductas infractoras aludidas.

Segundo.

La recurrente argumenta que las pruebas que presentó no fueron valoradas por la responsable conforme a las exigencias del derecho y las máximas de la justicia.

Al respecto, manifiesta que la autoridad responsable no realizó el análisis exhaustivo para efectos de poder determinar de manera congruente y apegada a derecho, sino por el contrario, únicamente efectuó una valoración de manera superficial a los informes y demás pruebas exhibidas por la recurrente.

Además, la inconforme manifiesta que la resolución que recurre no fue resuelta con perspectiva de género, puesto que por el simple hecho de ser mujer se les da credibilidad a los testigos ofertados por los otros infractores, desestimando en varios puntos las pruebas documentales ofertadas por ella misma, así como la normatividad aplicable, aunado a que se le impuso una sanción mayor que a su superior jerárquico, quien es totalmente responsable de la JDE.

Tercero.

La inconforme refiere que en ninguna parte del Catálogo se establece que el puesto de “Vocal Secretario” tenga bajo su responsabilidad administrar y supervisar de forma directa los asuntos de carácter administrativo de la JDE, salvo la premisa de que obre instrucción por medios oficiales que faculte y precise las acciones a seguir, sustituyéndose así las decisiones y acciones que, en su caso, le son competentes al Vocal Ejecutivo Distrital o del Enlace Administrativo.

Asimismo, señala que no existe documento alguno con el que se acredite que el entonces auxiliar administrativo fue comisionado al área en la que la recurrente es titular, por lo tanto, indica que resultan inverosímiles las imputaciones que el Vocal Ejecutivo Distrital y el Enlace Administrativo realizan a su persona. De esta

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

manera, señala que al no demostrarse que el entonces auxiliar administrativo había sido designado a su área y bajo su supervisión directa, la promovente no tenía la responsabilidad de darle seguimiento e instrucciones respecto al desempeño de sus actividades.

La promovente expone que la resolutora bajo ninguna circunstancia acredita plenamente que ella misma ostente las obligaciones que se le atribuyen, y mucho menos que haya demostrado con la propia normatividad a la que cita que sus obligaciones son esas, aun y cuando conforme al artículo 72, numeral 3 de la LGIPE señala, entre otras cosas, que el Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo Distrital en las tareas administrativas de la JDE; por lo que, bajo ese criterio, la recurrente no tiene las funciones que se le pretenden atribuir.

En consecuencia, manifiesta que la apreciación de la resolutora es equivocada basada en esas circunstancias, puesto que se debió de someter a un análisis específico y conforme a los catálogos existentes vigentes para cada puesto, respecto de las funciones precisas que tienen a su responsabilidad. Desde esa perspectiva, alude que resulta incongruente la resolución, la cual no se ajusta a derecho, violando en su perjuicio el principio *pro persona*, la carta de derechos humanos y todos los acuerdos, protocolos y tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte. Por lo cual, bajo ese contexto la recurrente considera que debe ser eximida de las responsabilidades que se le atribuyen en el Procedimiento Laboral Sancionador de referencia.

SEXTO. Fijación de la litis.

La litis en el presente medio de impugnación, se constriñe a estudiar los motivos de inconformidad planteados por la recurrente con la finalidad de determinar si hubo violación a las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias en la tramitación y resolución del Procedimiento Laboral Sancionador, derivado de una indebida valoración de pruebas y de la responsabilidad de la recurrente, lo que amerita que se revoque la resolución controvertida, o si, por el contrario, el actuar de las autoridades instructora y resolutora se apegó a derecho, lo procedente será confirmar el acto impugnado.

SÉPTIMO. Estudio oficioso de caducidad.

El estudio de la caducidad de la facultad de la autoridad instructora para iniciar un Procedimiento Laboral Sancionador es un elemento fundamental para la validez de

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

un acto de molestia, por lo que constituye una cuestión preferente que debe ser analizada de oficio por este órgano colegiado.

Lo anterior, porque la caducidad se trata de una institución jurídica por virtud de la cual se extinguen las facultades de la autoridad para instruir un procedimiento en el que se impongan sanciones por la inobservancia a la ley.

Así, en el Procedimiento Laboral Sancionador, la caducidad se instituye en beneficio de la seguridad jurídica de los trabajadores del Instituto, para establecer un límite temporal al ejercicio de las facultades de la autoridad instructora para iniciar el Procedimiento Laboral Sancionador en el que, de ser el caso, se impone una sanción por las infracciones a la ley de la materia.

De esa manera, las y los trabajadores tienen certeza sobre el plazo que, como máximo, tiene la instructora para iniciar en su contra un procedimiento en materia laboral.

Es así que, por tratarse de una cuestión de orden público y de previo y especial pronunciamiento, en la presente resolución se analiza si se actualiza la caducidad de la facultad de la autoridad instructora para ordenar el inicio del Procedimiento Laboral Sancionador.

Al respecto, el artículo 310 del Estatuto establece que la facultad para determinar el inicio del Procedimiento Laboral Sancionador **caducará en seis meses contados a partir del momento en que la autoridad instructora tenga conocimiento formal de la conducta infractora.**

Asimismo, dicho precepto estatutario establece que la facultad para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las faltas **caducará en tres años, contados a partir del inicio del procedimiento,** en el caso de faltas graves y muy graves, y un año en el caso de faltas leves.

Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, numeral 1, inciso b), fracción VII, de los Lineamientos, la autoridad instructora es el área que conoce de quejas y denuncias desde el inicio de la investigación, hasta el cierre de instrucción del Procedimiento Laboral Sancionador.

De igual manera, el artículo 291 del Estatuto, así como artículo 3, numeral 1, inciso b), fracción V, de los Lineamientos, y el punto 5.5. del Protocolo, prevén que el área

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

de atención integral y orientación actúa desde la presentación de la denuncia o queja hasta antes del inicio de la investigación.

En este orden de ideas, y en atención a la interpretación funcional de las normas rectoras del procedimiento, la caducidad que refiere el artículo 310 del Estatuto, **sólo se puede actualizar a partir de que la autoridad investigadora ejerce formalmente sus atribuciones², después de recibir la denuncia respectiva, así como las actuaciones que se practicaron en el área de primer contacto y orientación.**

Ello, porque la autoridad instructora tiene el deber de realizar diligencias de investigación y estar posibilidad de allegarse de mayores elementos de convicción, aclarar aspectos que estime relevantes o trazar líneas adicionales de indagación, sobre la base del conocimiento formal de los hechos, lo que supone, al menos, el conocimiento previo, mínimo y suficiente, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que éstos ocurrieron y que, razonablemente, justifican y permiten realizar las diligencias citadas.

Tal razonamiento se justifica plenamente, en la circunstancia de que la facultad investigadora constituye una potestad, incluso, en ciertos casos, una obligación de la autoridad instructora para analizar de manera detenida y exhaustiva todos los elementos de los que se allegó para poder determinar una posible conducta infractora, así como la probable responsabilidad de la persona denunciada para iniciar el Procedimiento Laboral Sancionador.

Dicho lo anterior, se procede a realizar el cómputo de la caducidad del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, para lo cual, se utilizará el criterio jurisdiccional emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución del juicio laboral ST-JLI-8/2023.

Así, de las constancias que obran en autos se advierte que el **15 de agosto de 2022** la autoridad instructora ordenó admitir la denuncia y dar vista al área de investigación para que en términos de los artículos 36 y 37 de los Lineamientos, se recabaran mayores elementos de prueba, a efecto de determinar sobre el inicio del Procedimiento Laboral Sancionador.

² Sirve de sustento a lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el cinco de junio de este año, el juicio laboral radicado en el expediente ST-JLI-8/2023.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

De esta forma, la fecha en que la autoridad instructora tuvo conocimiento formal de la conducta infractora fue a partir de la fecha indicada, dado que, desde esa data fue que se llevó a cabo la primera actuación para iniciar las investigaciones, derivado del conocimiento mínimo, claro y razonable de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en que se suscitaron los hechos denunciados.

Es así que, de una interpretación sistemática de los artículos 280 y 310 del Estatuto, se advierte que los plazos establecidos en meses se considerarán conforme al día calendario, es decir, si la autoridad instructora tuvo conocimiento de los hechos a partir del 15 de agosto de 2022, a través de la emisión del auto de remisión a investigación del expediente INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, el plazo de los 6 meses para determinar el inicio del Procedimiento Laboral Sancionador **se cumplió el 15 de febrero de 2023.**

Por tanto, si el auto de inicio del Procedimiento Laboral Sancionador materia de la presente resolución se emitió el **15 de diciembre de 2022**, la autoridad instructora lo hizo en el plazo previsto para tal fin.

En el siguiente esquema se ejemplifican los plazos señalados:



Finalmente, es preciso señalar que, incluso, si se computara el plazo desde la fecha en que se recibió la denuncia en la Dirección Jurídica, siendo esta el **29 de junio de 2022**, la propia autoridad instructora actuó dentro del plazo de los 6 meses para determinar el inicio del Procedimiento Laboral Sancionador, toda vez que, al tomar como inicio del cómputo esa fecha, el plazo fenecería el **29 de diciembre de 2022**, y el auto de inicio del procedimiento se emitió el día 15 del mismo mes.

OCTAVO. Estudio de fondo.

Esta JGE procede a realizar el estudio de los agravios atendiendo a su similitud o particularidad, según sea el caso, sin que tal actuar le cause un perjuicio a la disconforme, pues lo importante es que todos ellos sean analizados. Sirve como criterio orientador el contenido de la Jurisprudencia 04/2000 que indica:

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. *El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados”.*³

En tal virtud, esta JGE procede a realizar el análisis respecto del agravio **primero**, el cual se hace consistir en que la responsable no atendió a lo dispuesto en el artículo 311 del Estatuto, mismo que prevé que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de una conducta o conductas probablemente infractoras deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad instructora, debiendo remitir los elementos de prueba con que cuente. Asimismo, el órgano u autoridad que reciba una denuncia o algún escrito relacionado con la denuncia de una conducta o varias conductas probablemente infractoras, lo deberá remitir, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, a la autoridad instructora del Procedimiento Laboral Sancionador.

Ello, debido a que mediante oficio de fecha 1° de junio de 2022, los ahora infractores comunicaron al Encargado de la Vocalía Ejecutiva de la JLE de las irregularidades cometidas por el entonces auxiliar administrativo; sin embargo, fue hasta el día 28 de junio del mismo año, cuando a través del oficio INE/JLE/CA/0397/2022, el Coordinador Administrativo hizo del conocimiento de la autoridad instructora las conductas infractoras aludidas.

Siendo así, que transcurrieron 27 días entre esas acciones, por lo cual, la promovente considera que se vulneraron en su perjuicio sus derechos humanos y al debido proceso, ya que el Procedimiento Laboral Sancionador caducó desde el momento en que no se cumplió con la regla prevista en el artículo 311 del Estatuto.

Al respecto, el artículo 44 de los Lineamientos establece que el auto de inicio es la primera actuación con la que formalmente comienza el Procedimiento Laboral Sancionador, el cual se deberá notificar a las partes en el plazo previsto en el artículo 355 del Estatuto y dentro del plazo de seis meses contados a partir de que la autoridad instructora tuvo conocimiento formal de la posible conducta infractora, con la finalidad de que las y los trabajadores cuenten con la seguridad jurídica de que, transcurrido el plazo previsto en el Estatuto, no podrán ser sometidos a ningún

³ Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte – Vigentes, Pág. 27

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

tipo de procedimiento sancionador y menos aún, a la imposición de una sanción por esa conducta.

Esta resolutoria determina que no le asiste la razón a la inconforme, toda vez que la primera actuación con la que formalmente comienza el Procedimiento Laboral Sancionador, es precisamente el auto de inicio del mismo, por lo cual, se advierte que no se puede precluir una acción dentro de un procedimiento cuando aún no ha iniciado el mismo, tal y como lo pretende hacer valer la promovente.

Asimismo, si bien, el Encargado de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la JLE no observó el plazo previsto en la disposición descrita, lo cierto es que la misma no prevé que ante este tipo de casos aplique la caducidad para la autoridad instructora de iniciar el Procedimiento Laboral Sancionador, tal y como si lo prevé el artículo 310 de la misma norma Estatutaria.

Igualmente, contrario a lo que argumenta la inconforme, referente a que dicha situación vulneró en su perjuicio sus derechos humanos y el debido proceso, aplicar la norma en el sentido que solicita generaría una transgresión a las finalidades del Procedimiento Laboral Sancionador, puesto que caducaría la facultad de la instructora para iniciar dichos procedimientos antes de que esta misma conozca de las denuncias sobre actos u omisiones realizados por parte del personal de este Instituto que sean contrarios a la norma, sin que esa responsabilidad recaiga sobre la propia instructora o la autoridad resolutoria, lo que si implicaría una transgresión, no solo a los derechos de posibles víctimas, sino también al correcto funcionamiento de esta autoridad electoral.

En consecuencia, resulta **INFUNDADO** el agravio **primero**, por los motivos antes expuestos.

Por su parte, se procede al análisis del agravio **segundo**, consistente en el señalamiento de que las pruebas que presentó la recurrente no fueron valoradas por la responsable conforme a las exigencias del derecho y las máximas de la justicia.

Sobre este punto, se manifiesta que la autoridad responsable no realizó un análisis exhaustivo para efecto de poder determinar de manera congruente y apegada a derecho, sino por el contrario, únicamente realizó una valoración de manera superficial a los informes y demás pruebas exhibidas por la recurrente.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Además, la promovente manifiesta que la resolución que recurre no fue resuelta con perspectiva de género, puesto que por el simple hecho de ser mujer se les da credibilidad a los testigos ofertados por los otros infractores, desestimando en varios puntos las pruebas documentales ofertadas por ella misma, así como la normatividad aplicable, aunado a que se le impuso una sanción mayor que a su superior jerárquico, quien es totalmente responsable de la JDE.

Al respecto, en su escrito de inconformidad la recurrente no precisó a qué se refiere al señalar que la valoración de las pruebas efectuada por la responsable fue superficial, por lo cual, resulta **INOPERANTE** su inconformidad, toda vez que corresponde a una manifestación general y abstracta, sin que se exponga la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere, además de que, en ningún momento establece razonamiento o elemento mínimo para apoyar sus afirmaciones.

Sobre este punto, debe señalarse que los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un medio de impugnación, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar el acto o resolución impugnado.

Por tanto, lo señalado por la recurrente en su escrito de Recurso de Inconformidad no es suficiente para tener por debidamente configurado un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere, además de que, en ningún momento establece razonamiento o elemento mínimo para apoyar su afirmación.

En ese sentido, en el presente asunto son aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales:

I. Tesis jurisprudencial I.6o.C. J/21 de los Tribunales Colegiados de Circuito⁴:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a

⁴ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 1051.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.

II. Tesis jurisprudencial I.4o.A. de los Tribunales Colegiados de Circuito⁵:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. *Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.*

III. Jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.—*El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.*

⁵ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007. Materia(s): Común.

⁶ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Con independencia de lo anterior, se debe señalar que el propósito fundamental de los medios de prueba consiste en allegar al juzgador de los elementos necesarios para que conozca, con la mayor precisión posible, la verdad acerca de los hechos generadores de la controversia que ha sido sometida a su potestad, permitiendo que, con base en tal conocimiento, la resolución respectiva esté plenamente ajustada a derecho, así como debidamente fundada y motivada.

En efecto, los hechos alegados y relevantes constituyen la materia fáctica que debe ser probada, razón por la cual, las circunstancias de modo, tiempo y lugar se vuelven elementos imprescindibles para la decisión de la controversia, ya que a través de éstas se detallan de forma precisa como sucedieron los hechos, quienes fueron las personas que intervinieron, que medios se utilizaron para su comisión, el lugar o lugares donde se llevaron a cabo, las características de éstos, así como la hora, día, mes, año y cualquier otra circunstancia de tiempo que ubican los hechos en un lugar determinado y sus condiciones de ejecución, ya sea por acción u omisión, por quienes lo realizaron.

Acorde a lo anterior y contrariamente a lo manifestado por la recurrente, de la revisión a la Resolución impugnada, así como de las constancias que integran el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, se desprende que la responsable actuó conforme a derecho, pues valoró en lo individual y en su conjunto el material probatorio, a fin de determinar la existencia o no de la conducta atribuida a la misma.

Así, con el fin de determinar el alcance probatorio de cada uno de los elementos a considerar, la resolutora realizó la debida valoración de cada uno de los medios de prueba, en conjunto con un análisis a la reglamentación interna sobre las atribuciones que tiene cada servidora y servidor público implicado, exponiendo de manera clara y puntual los argumentos que la llevaron a arribar a la respectiva determinación, tal y como se advierte el apartado de “Estudio de fondo” de la resolución impugnada, que, de manera enunciativa más no limitativa, se cita a continuación (énfasis añadido):

“Es importante señalar, que de autos se desprende un correo electrónico de 2 de junio de 2019, en el cual la probable infractora, hizo del conocimiento que las actividades que desempeñaría el entonces auxiliar administrativo, estarían relacionadas con el control de los requerimientos del parque vehicular, control de los requerimientos de entrega de combustible, captura en el Sistema SIAR, las comprobaciones de combustible, reporte y seguimiento al programa de mantenimiento vehicular, para lo cual, informó que el reporte y supervisión de tales actividades, le correspondían al Enlace Administrativo Distrital, al Vocal Ejecutivo y **a la Vocal Secretaria requerida, en Auxilio del Titular de la Junta Distrital Ejecutiva** en la

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

administración de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la Junta Distrital Ejecutiva.

Como fue señalado en dicho correo electrónico la probable infractora utilizó un medio de comunicación oficial para informar a los probables infractores y demás al personal de la Junta Distrital respecto de las actividades que le fueron conferidas en ese entonces al auxiliar Distrital, señalando que sería el Enlace Administrativo, el encargado de recibir reporte y supervisión de dichas actividades, **de los elementos probatorios aportados por los probables infractores, no existe prueba en contrario, de algún oficio o comunicación oficial en la que los probables infractores se pronunciaran o en su caso se inconformaran sobre las actividades asignadas al Auxiliar Distrital.**

Aunado a lo anterior, es preciso señalar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 182, del Manual de Normas Administrativas, es obligación de las Juntas Distritales Ejecutivas, verificar que el parque vehicular que tengan asignado se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento; así como, por el artículo 192 del citado Manual, le corresponde a los Vocales Secretarios en las Juntas Distritales, supervisar el correcto uso de los vehículos y promover con toda oportunidad, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; así como el cumplimiento de los programas de verificación vehicular, en su caso. [...]

La probable infractora señala que era el Vocal Ejecutivo la figura al cual el entonces auxiliar distrital debía reportarle, sin embargo, parte de la premisa errónea de que ella no era responsable, **ya que de acuerdo con la normatividad señalada, esta autoridad determina que no le asiste la razón a la probable infractora, toda vez que, si existen elementos suficiente para determinar las omisiones en su actuar,** toda vez que, su conducta no se ajusta a la descrita en el Catálogo que describe literalmente sus funciones.

Por lo tanto, se le atribuye la responsabilidad de no haber desempeñado sus funciones, ya que no llevaron a cabo las acciones administrativas correspondientes inherentes a su cargo, relacionado con la recepción, control, registro, administración y supervisión, de vales de gasolina y/o combustible que en su conjunto amparan la cantidad de \$196,659.00 (Ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), de tal modo que fue hasta que la Vocalía Local advirtió dicho faltante, que la infractora inició con acciones a fin de determinar la causa de dicho faltante, hechos que se le reprochan a la infractora, toda vez que, no desempeñó sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiado, dado a que su actuar se relaciona, con las funciones a cargos de las y los Enlaces Administrativos Distritales, referentes a la gestión de recursos materiales y financieros de las Juntas Distritales Ejecutivas, siendo ellos los que auxilian a la Vocalía Secretarial en dicha funciones, pretendiendo excusarse del cumplimiento de sus funciones aludiendo la responsabilidad a otros funcionarios públicos.

[...]

Ahora bien, cabe precisar que, esta autoridad, impone dichas sanciones **en razón del grado de responsabilidad inherente al cargo que ostentan los denunciados, es decir, de acuerdo con el Catálogo de cargos y puestos,** se advierte que es responsabilidad del Vocal Ejecutivo la de coordinar el ejercicio de las funciones y actividades de la Junta Distrital

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Ejecutiva, así como de administrar los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Junta Distrital Ejecutiva.

La de la Vocal Secretaria es supervisar la administración de recursos humanos, financieros y materiales de la Junta Distrital Ejecutiva, así como **validar** documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia; y **garantizar** que los sistemas informáticos en el distrito electoral, en el ámbito de su competencia, cuenten con la información actualizada, a fin de mantener informadas a las instancias correspondientes del Instituto, conforme al artículo 192 del citado Manual de normas administrativas, le corresponde, supervisar, el correcto uso de los vehículos y promover con toda oportunidad, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; así como el cumplimiento de los programas de verificación vehicular en su caso.”

En ese tenor, se destaca que el actuar de la autoridad se encauzó a determinar si la recurrente y los infractores 1 y 2 no desempeñaron las funciones inherentes a su puesto con diligencia, cuidado y esmero apropiado, en virtud de que no llevaron a cabo las acciones administrativas correspondientes inherentes a su cargo relativas a la recepción, control, registro, administración y supervisión, de vales de gasolina y/o combustible que en su conjunto amparan la cantidad de \$196,659.00 (Ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y si con ello se transgredió lo dispuesto en el artículo 71, fracción XI del Estatuto.

De esta manera, de la lectura de la resolución recurrida se puede observar que la responsable valoró cada una de las pruebas, tanto documentales como testimoniales, las cuales, concatenadas con la normatividad que se señala en la propia resolución, sostienen indicios que resultan suficientes para acreditar la conducta que se le atribuye a la quejosa, por lo que, contrario a lo señalado por esta misma, el caudal probatorio fue valorado en apego al principio de legalidad.

Además, con base en lo dispuesto en el Manual de Normas Administrativas en materia de recursos materiales y de servicios generales del INE y en el Catálogo, se tiene la certeza que a la recurrente le corresponde, entre otras funciones, el supervisar la administración de recursos humanos, financieros y materiales de la JDE, así como validar documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia; y garantizar que los sistemas informáticos en el distrito electoral, en el ámbito de su competencia, cuenten con la información actualizada, a fin de mantener informadas a las instancias correspondientes del Instituto, **actividades que no llevó a cabo con la diligencia, cuidado y esmero apropiados**, de lo cual se tiene convicción gracias a la correcta valoración que realizó la responsable al conjunto de pruebas.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Por su parte, es indispensable resaltar que resolver con perspectiva de género no significa que se otorgue la razón a una persona por el simple hecho de su género, como lo pretende la recurrente, puesto que, si bien, ello atiende a que se valoren los medios de prueba con un estándar diferenciado, lo cierto es que esa situación se da únicamente cuando se está en presencia de una probable víctima, lo cual no se actualiza en el presente asunto.

Por esta razón, no obstante que la recurrente no es la persona denunciante o la víctima en el presente asunto, como ya se mencionó previamente, del caudal probatorio se tiene acreditada la conducta que se le imputa, al ser valoradas en su conjunto la totalidad de las pruebas.

De igual forma, en lo concerniente al señalamiento de la promovente, referente a que se le impuso una sanción mayor que a su superior jerárquico, quien es totalmente responsable de la JDE, esta JGE considera que el criterio adoptado por la responsable en la resolución impugnada es correcto, toda vez que las sanciones se determinaron en razón del grado de responsabilidad inherente al cargo que ostentan la y los infractores.

De ahí que, de acuerdo con el Catálogo de cargos y puestos, la responsabilidad de la Vocal Secretaria es supervisar la administración de recursos humanos, financieros y materiales de la Junta Distrital Ejecutiva, así como validar documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia; y garantizar que los sistemas informáticos en el distrito electoral, en el ámbito de su competencia, cuenten con la información actualizada, a fin de mantener informadas a las instancias correspondientes del Instituto; además, conforme al artículo 192 del citado Manual de normas administrativas, le corresponde, supervisar, el correcto uso de los vehículo y promover con toda oportunidad, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; así como el cumplimiento de los programas de verificación vehicular en su caso.

Es por ello que la recurrente, al tener dentro de sus funciones una responsabilidad **directa** sobre la conducta que se le atribuye, obtuvo una sanción mayor que la del infractor 1, a quien también se le cuantificó la sanción por ser quien tiene el cargo más alto en la escala jerárquica dentro de la JDE y, por ende, también tiene responsabilidad en el Procedimiento Laboral Sancionador que nos ocupa, no obstante que sus funciones no están **directamente** vinculadas con la conducta infractora.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

De esta manera, esta resolutora considera que las sanciones impuestas a las personas infractoras son proporcionales al grado de participación que tienen respecto de la conducta infractora, así como de acuerdo a las funciones y responsabilidades que tienen encomendadas de conformidad con la normatividad institucional.

Por las consideraciones expuestas, esta JGE arriba a la conclusión de que los argumentos vertidos por la recurrente dentro del agravio identificado como **segundo** son **INFUNDADOS**, al carecer de sustento jurídico.

Ahora bien, se procede al análisis del agravio **tercero**, en el cual la inconforme refiere que en ninguna parte del Catálogo se establece que el puesto de “Vocal Secretario” tenga bajo su responsabilidad administrar y supervisar de forma directa los asuntos de carácter administrativo de la JDE, salvo la premisa de que obre instrucción por medios oficiales que faculte y precise las acciones a seguir, sustituyéndose así las decisiones y acciones que, en su caso, le son competentes al Vocal Ejecutivo Distrital o del Enlace Administrativo.

Asimismo, señala que no existe documento alguno con el que se acredite que el entonces auxiliar administrativo fue comisionado al área en la que la recurrente es titular, por lo tanto, indica que resultan inverosímiles las imputaciones que el Vocal Ejecutivo Distrital y el Enlace Administrativo realizan a su persona. De esta manera, señala que al no demostrarse que el entonces auxiliar administrativo había sido designado a su área y bajo su supervisión directa, la promovente no tenía la responsabilidad de darle seguimiento e instrucciones respecto al desempeño de sus actividades.

La promovente expone que la resolutora bajo ninguna circunstancia acredita plenamente que ella misma ostente las obligaciones que se le atribuyen, y mucho menos que haya demostrado con la propia normatividad a la que cita que sus obligaciones son esas, aun y cuando conforme al artículo 72, numeral 3 de la LGIPE señala, entre otras cosas, que el Vocal Secretario auxiliará al Vocal Ejecutivo Distrital en las tareas administrativas de la JDE; por lo que, bajo ese criterio, la recurrente no tiene las funciones que se le pretenden atribuir.

También, manifiesta que la apreciación de la resolutora es equivocada basada en esas circunstancias, puesto que se debió de someter a un análisis específico y conforme a los catálogos existentes vigentes para cada puesto, respecto de las funciones precisas que tienen a su responsabilidad. Desde esa perspectiva, alude que resulta incongruente la resolución, la cual no se ajusta a derecho, violando en

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

su perjuicio el principio pro persona, la carta de derechos humanos y todos los acuerdos, protocolos y tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte. Por lo cual, bajo ese contexto la recurrente considera que debe ser eximida de las responsabilidades que se le atribuyen en el Procedimiento Laboral Sancionador de referencia.

Al respecto, es conveniente mencionar las siguientes funciones que tiene la Vocalía Secretaria Distrital bajo el código SPJDVS0, de conformidad con el Catálogo, tal y como lo hizo la responsable en la resolución recurrida:

1. Coordinar el ejercicio de las funciones y actividades de la JDE, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus atribuciones, con base en las normas aplicables y la planeación institucional.
2. **Administrar los recursos** financieros, **materiales** y humanos asignados a la JDE, con base en el presupuesto asignado y dentro del ámbito de su competencia, para proveer los elementos necesarios a dicho órgano en el cumplimiento de sus funciones.
3. **Coordinar y supervisar que los sistemas informáticos** cuenten con la información actualizada a fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas por las autoridades centrales.

Por otro lado, el Catálogo establece que para el puesto de Vocal Secretario Distrital, con el código SPJDVS0, se tienen los objetivos y funciones que se señalan a continuación:

1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la JDE.
2. Intervenir en los actos jurídicos de la JDE, para dar legalidad y certeza a los mismos y representar formalmente los intereses de la institución.
3. **Supervisar la administración de recursos** humanos, financieros y **materiales** de la JDE, así como **validar documentación comprobatoria del ejercicio del gasto**, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.
4. Garantizar que los sistemas informáticos en el distrito electoral, en el ámbito de su competencia, cuenten con la información actualizada, a fin de mantener informadas a las instancias correspondientes del Instituto.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Asimismo, los artículos 192 y 208 del Manual de Normas Administrativas en materia de recursos materiales y de servicios generales del INE, disponen (énfasis añadido):

*“Artículo 192. A los Responsables Administrativos en las Juntas Locales y **a los Vocales Secretarios en las Juntas Distritales**, les corresponde **supervisar** el correcto uso de los vehículos y promover con toda oportunidad, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; así como el cumplimiento de los programas de verificación vehicular en su caso.*

[...]

*Artículo 208. Tratándose de las Juntas Locales y Distritales, será obligación del resguardante o usuario, **devolver los vales de gasolina no utilizados**, correspondientes a la dotación mensual. En las Juntas Ejecutivas Locales se entregarán al Coordinador Administrativo y **en las Juntas Ejecutivas Distritales al Vocal Secretario**.”*

Abona a lo anterior que, tal y como lo asentó la responsable en la resolución impugnada, de autos se advierte el correo electrónico de fecha 2 de junio de 2019, en el cual la recurrente hizo del conocimiento que las actividades que desempeñaría el entonces auxiliar administrativo, estarían relacionadas con el control de los requerimientos del parque vehicular, el control de los requerimientos de entrega de combustible, la captura en el Sistema SIAR, las comprobaciones de combustible, el reporte y seguimiento al programa de mantenimiento vehicular, para lo cual, informó que el reporte y supervisión de tales actividades, le correspondían, además de al Enlace Administrativo Distrital y al Vocal Ejecutivo, a la Vocal Secretaria, en Auxilio del Titular de la JDE en la administración de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la JDE, situación que contraviene lo señalado por la promovente en su escrito de inconformidad.

A través del correo electrónico aludido, la inconforme utilizó un medio de comunicación oficial para informar a los ahora infractores y demás personal de la JDE, respecto de las actividades que le fueron conferidas en ese entonces al auxiliar distrital, señalando que sería el Enlace Administrativo el encargado de recibir el reporte y realizar la supervisión de dichas actividades.

En ese sentido, de los elementos de prueba aportados por los infractores, no existe prueba en contrario, de algún oficio o comunicación oficial en la que los infractores se pronunciaran o, en su caso, se inconformaran sobre las actividades asignadas al auxiliar distrital.

De esta manera, se puede corroborar que, contrario a lo que manifiesta la recurrente en su escrito de inconformidad, de conformidad con el Catálogo, así como el Manual

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

de la materia, **es obligación de las y los Vocales Secretarios Distritales, administrar y supervisar la administración de los recursos materiales y financieros**; actividades que se relacionan con las funciones a cargo de las y los Enlaces Administrativos Distritales, referentes a la gestión de recursos materiales y financieros en las JDE.

Por tanto, esta JGE considera que la responsable es precisa al indicar que la recurrente, en el marco de sus atribuciones, competencia y funciones, es la responsable de la administración, control, supervisión, resguardo y gestión de vales de gasolina ministrados a la JDE de su adscripción, aún y cuando estas actividades, como refiere en su informe, estaban a cargo del infractor 1.

Sobre este punto, la recurrente señala que el entonces auxiliar distrital reportaba sus funciones directamente al Vocal Ejecutivo, manifestando que ella no es la responsable de la conducta que se le atribuye, sin embargo, tal y como lo asentó la responsable en su determinación, existen elementos suficientes para determinar las omisiones en el actuar de la inconforme, ya que su conducta no se ajustó a la descrita en el Catálogo que describe literalmente sus funciones.

Consecuentemente, la inconforme no puede omitir llevar a cabo y dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de las facultades que se encuentran establecidas en la normatividad institucional y a las que se encuentra obligada derivado de la relación laboral que tiene con este Instituto.

En tal virtud, resultan **INFUNDADOS** los argumentos vertidos por la inconforme, toda vez que se tiene por acreditado que la recurrente no llevó a cabo las responsabilidades que tenía a su cargo con la debida diligencia, cuidado y esmero apropiado, de conformidad con las consideraciones que han sido expuestas en el presente apartado.

NOVENO. Determinación.

De la resolución controvertida del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva del INE el 13 de junio de 2023, se advierte que el estudio relativo a la acreditación de la conducta y responsabilidad del recurrente se encuentra debidamente fundada y motivada; por lo tanto, se cumplió con el principio de legalidad.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

Asimismo, resulta evidente que la resolución se emitió en observancia al principio de congruencia; ya que la responsable resolvió el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, de acuerdo con la norma estatutaria y los lineamientos aplicables, ya que las autoridades instructora y resolutora se concretaron a determinar si había elementos para iniciar el procedimiento laboral sancionador y si de autos se acreditaba la responsabilidad de la ahora recurrente, en relación a la transgresión a lo dispuesto en el artículo 71, fracciones XI y XXIII del Estatuto, y de conformidad con las pruebas desahogadas, las cuales contribuyeron para acreditar la conducta atribuida a la persona recurrente.

Igualmente, es preciso dejar sentado que en la resolución impugnada se aplicó la normativa vigente que regula las sanciones derivadas de la resolución de un Procedimiento Laboral Sancionador.

Así las cosas, el procedimiento instaurado a la parte recurrente se emitió apegado al principio de proporcionalidad, en el que se observó el marco legal aplicable y se expusieron las razones que acreditaron la conducta infractora.

Sobre este punto, es importante señalar que la responsable determinó que la conducta infractora acreditada en su resolución se califica como **grave**, atendiendo a la valoración del contexto en que acontecieron los hechos, ya que de los elementos que obran en el expediente de la resolución controvertida no se advierte una afectación de carácter irreparable a los intereses del INE o de terceros.

Por lo anterior, la sanción impuesta a la recurrente resulta ser una medida necesaria para evitar que la conducta infractora se vuelva a repetir.

Para lo anterior, sirve de criterio orientador la siguiente jurisprudencia:

“PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS De la interpretación del citado precepto con constitucional se advierte que la gravedad de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la legislación penal no está constitucionalmente exenta- pues la decisión

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

que se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio constitucional⁷.

Por lo tanto, considerando la gravedad de la conducta infractora, el grado de afectación al bien jurídico protegido, la responsabilidad de la hoy recurrente en la comisión de la falta, así como los efectos perniciosos de la conducta infractora, esta JGE considera que la resolución recurrida se ajusta a derecho al imponer la medida disciplinaria consistente en la suspensión de 10 días sin goce de sueldo.

En consecuencia, se llega a la conclusión de que la determinación recurrida es congruente con la sanción impuesta, debido a que, contrario a lo argumentado por la recurrente, la autoridad observó todos los requisitos necesarios con apego a la ley, haciendo una correcta valoración de los medios de prueba, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que la sanción impuesta es proporcional a la vulneración cometida por la infractora.

Por lo anteriormente expuesto, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, con fundamento en el artículo 360 del Estatuto se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el 13 de junio de 2023, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente resolución a la **Eliminado.** Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP y resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral INE-CT-R-0487-2018. Datos personales confidenciales, por conducto de la Dirección Jurídica, para su conocimiento.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, agregar una copia de la presente Resolución al expediente personal que se tiene a nombre de la recurrente y se realicen las acciones a las que haya lugar.

⁷ Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Materia: Constitucional, Penal; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 503; Décima Época

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023

CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 11 de diciembre de 2023, por votación unánime del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Licenciado Alejandro Sosa Durán; de las encargadas de los Despachos de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Doctora Iulisca Zircey Bautista Arreola; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Carmen Gloria Pumarino Bravo; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestra Nancy Natividad Rendón Fonseca y, de Administración, Maestra Claudia Edith Suárez Ojeda; de los encargados de los Despachos de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestro Isaac David Ramírez Bernal y de lo Contencioso Electoral, Licenciado Hugo Patlán Matehuala y; del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciado Giancarlo Giordano Garibay; de la encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva y Secretaria de la Junta General Ejecutiva, Licenciada María Elena Cornejo Esparza; no estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y la Consejera Presidenta y Presidenta de la Junta General Ejecutiva, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LA ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**LIC. MARÍA ELENA CORNEJO
ESPARZA**

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: INE/RI/SPEN/50/2023



Junta General Ejecutiva

Tipo de documento: Documento clasificado (parcialmente): Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/50/2023, interpuesto en contra de la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/107/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Fundamento jurídico: Con fundamento en los artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 y 8, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; 15, numeral 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como la resolución INE-CT-R-04873-2018 emitida por el Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.

Clasificación Parcial

1. Se clasifican como **confidenciales** los datos correspondientes al nombre y puesto de la parte recurrente, ubicados en las páginas 1, 2, 5, 14 y 32.
2. Se clasifica como **confidencial** el dato correspondiente al nombre de la parte denunciante, ubicado en la página 1.
3. Se clasifica como **confidencial** el dato correspondiente al nombre de la persona que ejecutó la conducta infractora, ubicado en la página 1.
4. Se clasifican como **confidenciales** los datos correspondientes a los nombres y puestos de las personas que fueron sancionadas dentro del Procedimiento Laboral Sancionador, además de la promovente, ubicados en las páginas 2, 5 y 14.
5. Se clasifican como **confidenciales** los datos correspondientes a los nombres y puestos de las personas que fungieron como testigos en el Procedimiento Laboral Sancionador, ubicados en la página 2.

Titular del Área
